

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA LABORAL

Acta No. 200

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTES	Jesús Evelio Mosquera Córdoba y José Nelson Gómez Valencia
DEMANDADOS	GMV Construcciones S.A.S. y Bienes y Bienes S.A.
VINCULADOS	Colpensiones e Inversiones Campoamalia S.A.
RADICADO	050013105 00320180019301
TEMA	Trabajo suplementario, indemnización moratoria y responsabilidad solidaria
DECISIÓN	Confirma sentencia

Medellín, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Procede la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, con ponencia de la magistrada **ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ**, a resolver los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la demandada BIENES Y SERVICIOS S.A. contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

DEMANDA

JESÚS EVELIO MOSQUERA CÓRDOBA y JOSÉ NELSON GÓMEZ VALENCIA pretenden se declare que tuvieron contratos de trabajo con GMV CONTRUCCIONES S.A.S. del 22 de septiembre de 2015 al 19 de marzo de 2016 y que la empresa BIENES Y BIENES S.A. es solidariamente

responsable como beneficiaria o dueña de la obra. En consecuencia, piden que se condene a pagar cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones, indemnizaciones por despido injusto, moratoria del artículo 65 del CST y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, además de la indexación de las sumas adeudadas.

HECHOS

Como fundamento de sus pretensiones, indicaron que fueron contratados por GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. mediante contratos de trabajo verbales a término indefinido para prestar servicios como pileros ante BIENES Y BIENES S.A. en la obra denominada REGATTA, localizada en el municipio de Envigado – Antioquia. Dicha obra está a cargo de BIENES Y BIENES S.A. y GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. funge como su contratista.

Prestaron sus servicios personales del 22 de septiembre de 2015 al 19 de marzo de 2016, con un salario a destajo de \$80.000 por excavación de pila x C/ML y de \$5.000 por extracción de piedras sobre tamaños. Cada uno realizaba obras en cantidad de un metro con veinte centímetros lineales (1.2 ML) de excavación de pilas y extraían un promedio diario de 5 piedras sobre tamaño, para un salario promedio mensual de \$1.956.000 pagaderos cada 14 días. Cumplieron un horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 2 p.m.

Acataron las órdenes y actividades indicadas por GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. y atendieron directrices de BIENES Y BIENES S.A. por medio de sus ingenieros y maestros de obra. Dichas empresas también eran las dueñas de las herramientas, equipos, materiales y demás implementos requeridos para ejecutar el trabajo.

Fueron despedidos por GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. de forma unilateral, sin justa causa y sin el pago de las prestaciones sociales y vacaciones por el tiempo laborado. Además, los aportes a seguridad social se efectuaron sobre el SMMLV.

CONTESTACIONES

GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. aceptó los hechos relativos a la vinculación de los accionantes, pero señaló que los contratos fueron suscritos por duración de la obra o labor contratada y se cumplieron del 23 de septiembre de 2013 al 12 de diciembre del mismo año y nuevamente del 7 de enero al 4 de marzo de 2016. Refirió que la remuneración se pactó en el SMMLV y que se pagaron las prestaciones sociales y demás emolumentos al momento de terminar cada contrato. Se opuso a las pretensiones, con excepción de la que busca la declaratoria de existencia del contrato de trabajo y formuló la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas.

BIENES Y BIENES S.A. también se opuso a las pretensiones, por no ser la dueña o beneficiaria de la obra Regatta. No aceptó los hechos de la demanda y planteó las excepciones de inexistencia de la relación laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, falta de causa para demandar y toda otra “que resultare probada dentro del proceso”.

En audiencia del 15 de octubre de 2019 se ordenó integrar por pasiva a COLPENSIONES y a la sociedad INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A.

INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. aceptó haber contratado a GMV CONSTRUCCIONES, la que a su vez vinculó al personal para laborar en la obra Regatta; que la contratación de los accionantes fue en 2 momentos por duración de la obra o labor, pues esta se desarrolla por etapas y que se produjo el pago de la liquidación de prestaciones sociales. Se opuso a todas las pretensiones y en su defensa planteó las excepciones de fondo de buena fe, falta de causa para demandar y toda otra “que resultare probada dentro del proceso”. Como excepción previa propuso la de prescripción.

COLPENSIONES señaló que no le constan los hechos, se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto de las pretensiones dirigidas a las

empresas demandadas y propuso las excepciones de falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación, inexistencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, compensación, declaratoria de otras excepciones y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 23 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ que entre JESÚS EVELIO MOSQUERA CÓRDOBA y JOSÉ NELSON GÓMEZ VALENCIA, y la sociedad GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. existieron dos contratos de trabajo. El primero del 23 de septiembre de 2015 al 14 de diciembre de 2015 y el segundo, del 4 de enero de 2016 al 19 de marzo de 2016. DECLARÓ que las sociedades BIENES Y SERVICIOS S.A. e INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. eran las beneficiarias reales del trabajo realizado por los demandantes. CONDENÓ a GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. a pagar a cada uno de los actores la suma de \$3.447.725 a título de indemnización por despido sin justa causa, indexada a partir del 20 de marzo de 2016 y hasta cuando se efectúe su pago, y la ABSOLVIÓ de las demás pretensiones.

El Juez encontró acreditado con la prueba recaudada, que entre los demandantes y GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. existieron dos contratos por obra o labor determinada. Estableció que el salario devengando fue el SMLMV, como quiera que no se acreditó por otro medio el referido en la demanda y concluyó que de los servicios fueron beneficiarias las empresas BIENES Y SERVICIOS S.A. e INVERSIONES CAMPO AMALIA S.A., como dueñas de la obra.

Señaló que GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. no probó la causa de terminación de los últimos contratos de trabajo de los actores, pues la fecha límite de entrega de las pilas se pactó para agosto de 2016, conforme al otrosí del contrato de obra suscrito con BIENES Y SERVICIOS S.A. y los vínculos de trabajo se finalizaron en el mes de marzo de ese año.

Indicó que la empleadora aportó las liquidaciones y pagos de las prestaciones y aportes a seguridad social, así como los documentos que la declaraban a paz y salvo. Además, los demandantes no demostraron la omisión en el pago, por lo que no había lugar a imponer condena, ni a la indemnización moratoria.

En cuanto la indemnización moratoria por el no pago de aportes a salud, precisó que solamente fue solicitada en los alegatos de conclusión de la parte actora, pero no está incluida en las pretensiones de la demanda, razón por la cual no podía ser valorada.

RECURSOS DE APELACIÓN

El extremo accionante presentó recurso de apelación parcial contra la decisión, con fundamento en que se demostró que GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. incumplió sus obligaciones respecto al pago de aportes a seguridad social en pensiones con relación al tiempo laborado y el salario devengado.

Solicitó condenar también a la empresa al pago del trabajo suplementario, como quiera que al contestar la demanda confesó que los actores laboraban 59 horas semanales en un horario de lunes a viernes de 07:00 a.m a 05:30 p.m. y sábados de 07:00 am a 02:00 p.m, lo que incrementa el promedio salarial y da lugar a la reliquidación de las sumas pagadas durante la vigencia de los contratos de trabajo.

BIENES Y BIENES S.A. pidió revocar la condena, dado que la sociedad no tuvo injerencia en el proyecto Regatta, ni fue su constructora o beneficiaria de la obra, pues la documental aportada permite determinar que correspondía a una persona jurídicamente diferente - INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A.- con NIT y capital distinto, a quien se le dio el aval para realizar la construcción. Por otra parte, refirió que su vinculación al proceso se efectuó en el año 2019 y los vínculos laborales de los demandantes terminó en 2016, por lo que se encuentran prescritas las acreencias reclamadas.

ACTUACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213, la parte actora insistió en la condena por el reajuste de las prestaciones sociales conforme al tiempo realmente laborado y teniendo en cuenta el trabajo suplementario, en el pago de los aportes a seguridad social y de la indemnización moratoria. Respecto del primer aspecto, señaló que la jornada cumplida fue de 59.5 horas semanales, según confesaron las empresas contratante y contratista, por lo que se omitió contabilizar las 11.5 horas extras semanales. Además, se tuvieron en cuenta solamente 83 días de labores y no 80 como corresponde al primer contrato y respecto del segundo, la liquidación se efectuó por 54 días cuando se laboraron 76.

Con relación a las cotizaciones a seguridad social, el Juez debió aplicar el artículo 50 del C.P.T.S.S. con fundamento en el hecho 13 de la demanda, por lo que procedía el pago de los días faltantes de los meses de diciembre de 2015, enero y marzo de 2016. Finalmente, como se adeudan valores por salarios y aportes a seguridad social, procede la condena a la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T.

BIENES Y BIENES S.A. e INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. reiteraron su inconformidad con la condena a la indemnización por despido sin justa causa, por cuanto quedó demostrado que la constructora del proyecto fue la sociedad INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. Por ende y como quiera que los contratos de trabajo terminaron el 4 de marzo de 2016 y la vinculación de esta empresa al proceso se dio el 15 de octubre de 2019, sin que mediara reclamación previa, los derechos están prescritos.

COLPENSIONES pidió que se confirme la sentencia absolutoria en su favor, dado que ninguna de las pretensiones se elevó en su contra.

CONSIDERACIONES

No fueron objeto de controversia los siguientes hechos relevantes para resolver la instancia: que JESÚS EVELIO MOSQUERA CÓRDOBA y JOSÉ NELSON GÓMEZ VALENCIA tuvieron dos contratos por obra o labor determinada con la sociedad GMV CONSTRUCCIONES S.A.S., el primero desde el 23 de septiembre de 2015 hasta el 14 de diciembre de 2015 y el segundo, del 4 de enero de 2016 al 19 de marzo de 2016 (ver contratos suscritos y liquidaciones de acreencias en el archivo 09, folios 20 a 23, 29 a 32 y 43 a 46). Tampoco se discutió que la sociedad INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. era la propietaria de la obra Regatta (archivo 012, folios 32 a 59).

En este orden de ideas, el Tribunal debe definir si se acredita el trabajo suplementario reclamado que dé lugar a reliquidar las prestaciones y aportes a seguridad social y si se pagaron por periodos inferiores, si procede la imposición de la indemnización moratoria prevista en el parágrafo 1º del artículo 65 del C.S.T por el no pago de aportes a seguridad social y parafiscales. De igual manera, si las sociedades BIENES Y SERVICIOS S.A. e INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. son solidariamente responsables de las condenas impuestas a GMV CONSTRUCCIONES S.A.S., como beneficiarias de la obra.

TRABAJO SUPLEMENTARIO

Reclaman los demandantes el pago del trabajo ejecutado por fuera de la jornada máxima legal, con fundamento en que GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. confesó que las labores se cumplieron en 59 horas semanales, en un horario de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 05:30 p.m. y sábados de 07:00 a.m. a 02:00 p.m. Con ello, el servicio se prestó en un promedio 7 horas extras de lunes a viernes y 2 los sábados, lo que incrementa el su promedio salarial y da lugar a la reliquidación de las sumas pagadas.

Para resolver, es necesario recordar que para la procedencia de declaración judicial frente la remuneración del trabajo suplementario, deben concurrir por lo menos los siguientes elementos: i) encontrarse

plenamente acreditada la permanencia del trabajador en su labor, durante horas que exceden la jornada laboral pactada o la legal; ii) la cantidad de horas extras laboradas debe ser determinada con exactitud en la fecha de su causación, pues no le es dable al fallador establecerlas con base en suposiciones o conjeturas, iii) las horas extras deben ser ordenadas o por lo menos consentidas tácitamente por el empleador, y en ese sentido; iv) las horas extras de permanencia en el trabajo, deben estar dedicados valga la redundancia al trabajo, y no a cualquier otro tipo de actividades.

De esta manera, no basta con alegar su existencia, como ocurre en este caso, pues de vieja data y de manera reiterada ha indicado la Sala de Casación Laboral que *“Aquí, es importante recordar, que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen trabajadas”* (sentencia del 15 de julio de 2008, radicación 31637).

Así mismo, ha indicado que la prueba del tiempo suplementario debe ser fehaciente, de forma que permita generar certeza de los horarios y días en que se ejecutó, sin que sea dable obtenerla de las especulaciones surgidas de expresiones genéricas o imprecisas en cuanto a tiempo, modo y lugar, o cálculos sobre un horario frecuente o regular de trabajo (al respecto pueden también consultarse las sentencias SL1880-2023 radicación 86417, SL2305-2019 radicación 60663 y SL15014-2017 radicación 51666).

Para el caso particular, los demandantes no aportaron prueba documental o testimonial que permita establecer con total certeza el trabajo suplementario laborado, pues no resulta suficiente para su

cuantificación la expresión genérica de haber laborado en el horario atrás referido; así, pese a que en efecto GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. aceptó como cierto el hecho noveno de la demanda, de ello no se desprende una prueba suficiente para su cuantificación.

Nótese que los recurrentes son imprecisos en cuanto al cálculo sobre las horas de trabajo, pues tanto en la sustentación de la alzada, como en los alegatos de conclusión, indican que laboraban un promedio semanal de 59 horas, lo que no se ajusta a la jornada reconocida. Aparentemente, para llegar a ese número se descuentan horas de descanso, no se sabe si para tomar alimentos o por qué razón (ver artículo 167 del C.S.T.), por lo que se parte de estimaciones y/o hechos que no fueron planteados en la demanda y con ello, que no fueron objeto del debate probatorio.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la decisión de primera instancia es adecuada y en consecuencia se **CONFIRMARÁ** la absolución en este punto.

INDEMNIZACIÓN MORATORIA

Solicitan los actores la condena a GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. por la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del C.S.T. por el no cubrimiento total de las cotizaciones en materia de seguridad social y parafiscales.

Frente a la procedencia de la indemnización bajo esos supuestos, la Sala se remite al criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencia SL912-2023, radicación 95013, en la que señaló:

“Cabe destacar que respecto al parágrafo 1 del citado precepto legal, se tiene que la indemnización moratoria allí derivada, conforme a la intelección dada por la Corte, consiste en que su finalidad es garantizar el pago real de las cotizaciones al sistema de seguridad social y

parafiscales, independientemente de las demás formalidades exigidas, como el comunicar de manera efectiva dicha cancelación al trabajador.

Igualmente, esta corporación también ha insistido en señalar que la inobservancia de esa obligación, específicamente, por los últimos tres meses de la relación laboral, trae consigo el pago de la indemnización moratoria a favor del trabajador y no la ineficacia de la terminación del nexo con el consecuente reintegro al cargo desempeñado; dado que el objeto de la norma no recae en el restablecimiento real y efectivo del contrato de trabajo, sino, como ya quedó explicado, en garantizar la cancelación de los aportes a la seguridad social y parafiscales, tal como se dijo en múltiples pronunciamientos, entre otros, en la sentencia CSJ SL, 14 jul. 2009, rad. 35303, reiterada en decisión CSJ SL589-2014..."

A efectos de resolver la apelación, resulta pertinente señalar que en la demanda se solicitó la indemnización que prevé el artículo 65 del C.S.T., en los siguientes términos: "7. Sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a razón de \$65.200, a partir del 22 de septiembre de 2015 hasta que se haga efectivo el pago" (archivo 02, folio 6).

Frente a esta súplica, en los fundamentos de hecho se indicó: "DECIMO OCTAVO: Dicen mis mandantes, que NO obstante a la fecha de terminación de la relación laboral (10 de MARZO de 2016), la empresa GMV CONSTRUCCIONES S.A.S, No les ha cancelado, las prestaciones sociales por todo el tiempo de la relación laboral, como son: cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, compensación de vacaciones proporcionales al tiempo laborado" (archivo 02, folio 5).

Lo anterior, permite evidenciar que la discusión que surgió al interior del proceso, según el marco fijado por la parte actora y con el cual se trabó la litis, se encaminó a determinar si resultaba procedente la condena por indemnización moratoria dada la omisión o el pago deficitario de prestaciones sociales y vacaciones durante la vigencia y a la terminación del contrato de trabajo. Tal pretensión fue resuelta en

forma negativa por el juez de instancia, quien consideró que GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. acreditó el pago de los emolumentos reclamados, por lo que resultaba improcedente la condena.

El A-quo no efectuó estudio en relación con la indemnización moratoria por el no pago de aportes a seguridad social y parafiscales, prevista en el parágrafo primero del artículo 65 del C.S.T., en atención a que este tema no fue objeto de las pretensiones de la demanda y sólo se requirió por el apoderado de los actores al momento de presentar los alegatos de conclusión.

Del recuento procesal atrás efectuado, se advierte que no fue expresamente solicitada por los demandantes la indemnización moratoria con fundamento en el no pago a la terminación del contrato de las cotizaciones a seguridad social y parafiscalidad de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato de trabajo; por el contrario, lo requerido fue el pago de la sanción por la omisión en el pago de salarios y prestaciones sociales a la finalización de los vínculos laborales.

Sobre el particular, es necesario recordar que la sentencia que emita por un operador judicial debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, las cuales a su vez están conformadas por las razones de hecho y de derecho esgrimidas en tal momento, sin que las condenas impliquen que deben ser un calco de ellas (sentencia SL1413-2023, radicación 96069).

En gracia de discusión, aun cuando se estudiara de fondo tal pedimiento, lo cierto es que no hay lugar a imponer la indemnización moratoria reclamada, pues con las planillas de pago visibles a folios 26 a 42 del archivo 002, se advierte que GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. pagó los aportes a seguridad social y parafiscales, lo que no se desvirtúa con las manifestaciones de un pago deficitario por 2 días en diciembre de 2015 y por 4 días en enero de 2016, pues respecto a éstos lo procedente es ordenar que se sufraguen los aportes con intereses

de mora o mediante el cálculo actuarial respectivo, lo cual no fue objeto de condena, ni de inconformidad en la alzada.

Adicionalmente, no se advierte que la conducta de la empleadora estuviera desprovista de buena fe, pues el pago deficitario de unos pocos días de aportes o aún algunos días de salario conforme las liquidaciones finales de los contratos (archivo 01, 23, 32, 46) no demuestran un ánimo defraudatorio o la voluntad de desconocer el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran a su cargo.

Finalmente, y contrario a lo afirmado por los recurrentes, con las planillas de pago allegadas se evidencia que los aportes al sistema de seguridad social fueron cancelados a todos los subsistemas (salud, pensión y riesgos profesionales) (archivo 01, folios 42 a 46).

En esa medida se estima adecuada la decisión de primera instancia, por lo que se CONFIRMARÁ también frente a este punto.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

El juez de primera instancia condenó a BIENES Y SERVICIOS S.A. y a INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. como responsables solidarias de las condenas impuestas a GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. por las acreencias laborales en favor de los demandantes, dada la calidad de aquellas de beneficiarias o dueñas de la obra Regatta.

BIENES Y SERVICIOS S.A. apela con sustento en que no tuvo injerencia en el proyecto Regatta, ni fue su constructora o beneficiaria, pues documentalmente se probó que fue a INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A., sociedad con Nit y capital distinto, a quien se dio el aval para realizar la construcción.

Al respecto, el artículo 34 del CST, dispone:

“... el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas”.

En esa medida, se está en presencia de la responsabilidad solidaria del beneficiario o dueño de la obra con el contratista independiente *“a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”.*

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha definido la responsabilidad solidaria como *“Aquella tiene en el régimen laboral un contenido y unos efectos específicos, referidos a la especial responsabilidad que puede existir entre el contratante de un servicio o de una obra determinada, respecto de las acreencias laborales que su contratista adeude a su propio personal, pues, es requisito, que exista un vínculo donde este último asume con autonomía técnica, administrativa y financiera el desarrollo del encargo, mediante sus propios recursos y empleados y bajo su cuenta y riesgo. [...] Teniendo en cuenta lo anterior, la solidaridad de que trata dicha disposición supone la existencia de un encargo al contratista, esto es, el desarrollo de un servicio o la realización de una obra y, además, que las actividades entre el contratante o dueño de la obra y esta sean afines, similares, conexas o complementarias”* (SL1880-2023, radicación 93049)

En el mismo sentido, en sentencia SL652-2018, radicación 52918, reiteró que cuando se reclama la aplicación del artículo 34 C.S.T., debe

asumirse que la responsabilidad solidaria no fluye del convenio entre el contratista independiente y el beneficiario de la obra, sino que su fuente es la ley, por lo que resulta necesario analizar si la labor desarrollada por el trabajador a favor de la empresa usuaria forma parte del giro ordinario de sus negocios, o incluso si las actividades realizadas por la empresa proveedora en beneficio de la usuaria son conexas a su objeto social. Lo que prevalece es la realidad y no lo que figura en los certificados de Cámara y Comercio, sin perder de vista que el vínculo laboral solo se predica de la persona proveedora y el operario, no de la contratación entre la primera y el usuario o beneficiario del servicio.

De acuerdo con lo anterior y revisada la documental pertinente para resolver el recurso, se encuentran los certificados de existencia y representación legal de las sociedades GMV CONSTRUCCIONES S.A., INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. y BIENES Y SERVICIOS S.A.; la licencia de construcción y prórrogas a la misma, otorgada a INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. por la Curaduría Urbana Segunda de Envigado, mediante Resolución No. C2E-29 del 21 de enero de 2015, aclarada mediante Resolución C2E-0613-16 del 8 de septiembre de 2016 y sus prórrogas (archivo 012, folios 32 a 59); el contrato civil de mano de obra No. 000284 firmado entre INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. y GMV CONSTRUCCIONES S.A.S., con el objeto de realizar la "MANO DE OBRA PILAS DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PROYECTO REGATTA, UBICADO EN ENVIGADO EN LA CALLE 27D SUR No. 27 B-04 (archivo 12, folios 60 a 64) y su otro sí (archivo 015, folio 2); y, las actas de recibo total de los trabajos del contrato No. 0284-MO contrato No. 767-MO suscritas entre inversiones CAMPOAMALIA S.A. y GMV CONSTRUCCIONES S.A.S, de la pila de fundación de las torres 1 y 2 respectivamente (archivo 015, folio 1 y archivo 017, folio 5).

Resulta además relevante el interrogatorio de parte de la representante legal de BIENES Y SERVICIOS S.A., quien a su vez es la representante legal de INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. Respecto de la primera manifestó que la sociedad fue constituida en 1976 y su

objeto es la consecución de terrenos para desarrollar proyectos inmobiliarios, buscar los socios y el aporte de capital, esto es, que básicamente la sociedad se dedica a la gerencia de proyectos, es decir todo el tema económico, apalancamiento, ventas, plazos y posventas. En este caso, el proyecto Regatta era comercializado por BIENES Y SERVICIOS S.A. y la sociedad INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. se encargaba de la ejecución de la obra y de la contratación como tal.

Se recibió también la declaración de MARTHA YARAINY RUEDA ORTIZ, quien fue la directora de obra del proyecto Regatta y manifestó que este era propiedad de INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A., empresa que celebró varios contratos de obra con GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. para realizar la ejecución de las pilas de las torres 1 y 2 del proyecto.

Analizadas en su conjunto las anteriores elementos, para la Sala se configura la solidaridad establecida en el artículo 34 del reclamada por el demandante respecto de BIENES Y SERVICIOS S.A. pues la prueba permite establecer la existencia de una relación comercial con la sociedad CAMPOAMALIA S.A. como dueña de la obra, pues se encargó de la consecución de los terrenos y del capital para la ejecución del proyecto Regatta; por tanto, las labores desarrolladas por los demandantes a favor de la sociedad GMV CONSTRUCCIONES S.A.S. formaban parte del giro ordinario de sus negocios y las actividades realizadas por el contratista independiente son conexas a su objeto social.

En consecuencia, se estima adecuada la decisión de instancia que declaró solidariamente responsables de las condenas impuestas a favor de los demandantes tanto a la sociedad CAMPOAMALIA S.A., como a BIENES Y SERVICIOS S.A.

Sin costas, dado que no salieron avante los recursos de ambas partes.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

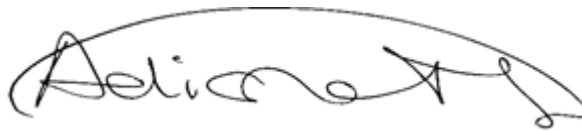
RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La presente providencia se notifica por edicto.

Los Magistrados,



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ

(Sin firma por ausencia justificada)

CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ